



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISEIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2021-00119
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MIGUEL DANIEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Dentro del presente asunto, el abogado **CARLOS LEONARDO BOLÍVAR PINZÓN**, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en representación del señor **MIGUEL DANIEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ**, ello con la finalidad de obtener la nulidad del oficio No. 20213210007732 del 15 de febrero de 2021, por medio del cual niega la solicitud de reconocimiento y pago de unas acreencias laborales por la presunta configuración de un contrato realidad, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2019 al 5 de diciembre de 2020.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las

especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ LA DEMANDA**, por las siguientes razones:

1. De las pretensiones de la demanda y el acto acusado

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1. La designación de las partes y sus representantes.*
 - 2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.***
 - 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
 - 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
 - 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
 - 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
- El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

De la misma manera, el artículo 163 del CPACA, señala que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Así mismo, si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.

Teniendo en cuenta las normas anteriores, el apoderado de la parte demandante solicita dentro del escrito contentivo de la demanda la nulidad del siguiente acto administrativo:

- **Oficio No. 20191100194581 del 14 de junio de 2019.**

A su turno, en el poder se le faculta al Profesional del Derecho, solicita la nulidad del acto administrativo que a continuación se enuncia:

- **Oficio No. 20213210007732 del 15 de febrero de 2021.**

Ahora bien, para el Despacho es palpable que ambos actos administrativos enunciados como actos acusados, son disimiles al que se encuentra aportado con la demanda, y el cual no fue solicitado en nulidad, esto es, **oficio No. 20211100075621 del 20 de abril de 2021**, que da respuesta a la reclamación administrativa elevada por el actor ante la entidad demandada el 5 de abril de la presente anualidad.

Conforme con lo anterior, el apoderado judicial de la parte actora deberá adecuar las pretensiones de la demanda, señalando para tal efecto, el acto administrativo correcto que pretenda en nulidad.

2. De la reclamación administrativa y las pretensiones de la demanda

Analizada la petición elevada por el actor el 5 de abril de 2021, se observa que en la misma se solicitó el pago de diferencias salariales que en consideración de la activa se le adeudan, junto con otros emolumentos prestacionales y unas indemnizaciones, todo ello en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2019 al 5 de diciembre de 2020.

Ahora bien, al realizar la comparación de la solicitud elevada ante la administración, con las pretensiones de la demanda, se observa que existen diferencias considerables. Por un lado, en la demanda se incluyeron pretensiones que no se elevaron ante la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y por otra parte, en el pedimento de reconocimiento y pago de la prima de servicios en la reclamación administrativa la solicita en el periodo comprendido del 1° de julio de 2016 al 31 de enero de 2020.

Conforme con lo anterior, es claro que las pretensiones instauradas en sede judicial exceden lo solicitado ante la administración, motivo por el cual, no guardan concordancia las peticiones en instancias administrativa y judicial.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que debe existir congruencia entre lo solicitado a través del derecho de petición que de origen a los actos acusados, y lo pretendido en el proceso judicial, pues aunque es posible que quien demanda agregue fundamentos de derecho adicionales en sede judicial, **no ocurre lo mismo frente a las pretensiones**, dado que en este preciso ítem, debe existir total correspondencia entre lo conocido por la administración previamente a demandar y lo que se solicita a la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente¹:

¹ Consejo de Estado. Providencia adiada 19 de febrero de 2015. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2004-00247.

“La vía gubernativa se torna así en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y los administrados, cuando media un conflicto de intereses, edificándose no sólo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración, cuyo beneficio es de doble vía, pues, constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva, como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que, posteriormente, se ventilará dentro de un proceso jurisdiccional.

Igualmente ha anotado esta Corporación que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley, sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial.”

De acuerdo con lo explicado, la situación planteada repercute directamente en el fondo del asunto, pues en caso de continuar el proceso en la manera como viene promovida la demanda, ello implicaría necesariamente una decisión de ineptitud de la demanda parcial, frente a las pretensiones que no concuerden con el derecho de petición.

Así mismo, frente a las pretensiones que no se incluyeron de ninguna manera en la petición, tampoco se podría realizar un estudio de legalidad en cuanto a su negativa, al no haber sido conocido tal pedimento previamente por la Sub Red.

Por lo anterior, deberá corregirse la demanda para que esta guarde total congruencia con lo pedido ante la administración, en todos los ítems que componen la misma.

3. Del derecho de postulación

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

“Artículo 160. Derecho de postulación. *Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar

este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Cogido General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (...)” (Negrillas del Despacho).

Lo anterior, si bien en el poder aportado se identifica el acto administrativo que pretende en nulidad dentro del presente medio de control, este no concuerda con el solicitado en las pretensiones de la demanda, así como, el allegado al expediente, por tal razón, deberá aportar un nuevo poder, identificando para tal efecto, los actos administrativos que se pretenden en nulidad, conforme a las directrices señaladas a lo largo de este proveído.

4. Acreditación envío copia de la demanda y sus anexos.

En el artículo 6°, inciso 3° del Decreto 806 de 2020, señala:

(...)

“En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”

Sombreado y subraya fuera de texto

Por su parte, el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece que:

“El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”

Por lo anterior, y como quiera que el apoderado judicial de la parte actora no acreditó con la radicación de la demanda el envío simultaneo a través de correo electrónico, de la copia de la demanda junto con sus anexos a la entidad demandada, pues si bien, allegó reporte de envío a la entidad, este hace alusión a la demanda elevada por el señor **Édison David Martínez Vaca**, el cual es disímil al proceso elevado por el aquí demandante el señor **Miguel Daniel Gutiérrez Sánchez**, por lo que este Despacho Judicial no puede dar el trámite correspondiente al presente proceso.

Así las cosas, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la ley 1437 del 2011, ley 1564 del 2012, decreto 806 de 2020 y ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **MIGUEL DANIEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ**, contra de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD – E.S.E. NORTE**.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la
providencia anterior hoy **30 DE JUNIO DE 2021**, a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0d162148ff665ed7a56beec4df366a8942b8085fed732b06117448ed714c86df

Documento generado en 29/06/2021 02:00:04 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>